

	JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI
Cali	Veintisiete (27) de abril de dos mil veintidós (2022)

Auto Interlocutorio No. 239.

MEDIO DE CONTROL:	EJECUTIVO
RADICACIÓN:	76001-33-33-001-2021-00119-00
DEMANDANTE:	ALVARO ANDRADE LEON
DEMANDADO:	MUNICIPIO DE PALMIRA – VALLE

1. ASUNTO

Procede el Juzgado a pronunciarse sobre el acuerdo conciliatorio celebrado entre los representantes judiciales del señor Álvaro Andrade León y el municipio de Palmira – Valle, formulada inicialmente el 15 de febrero de 2022, en la audiencia inicial de que trata el artículo 372 del Código General del Proceso, y posteriormente, plasmada en la certificación fechada el 06 de abril de 2022, por parte del Comité Técnico de Conciliación y Defensa Judicial de la Alcaldía Municipal de Palmira.

2. ANTECEDENTES

2.1. Que mediante sentencia No. 90 del 14 de abril de 2016, dictada por este Estrado Judicial, dentro del proceso ordinario de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, radicado bajo el No. 2013-00409-00, adelantado por el señor Álvaro Andrade León, en contra del municipio de Palmira – Valle, se accedió a las pretensiones de la demanda y se ordenó lo siguiente:

“...1.- DECLARASE no probadas las excepciones alegadas por la entidad demandada.

2.- DECLARASE la nulidad parcial de los Decretos 061 de marzo 31 de 2013 por medio del cual se establece la planta de empleos de la Administración Central del municipio de Palmira – Valle, y 062 de la misma fecha, por medio del cual se incorporan unos servidores públicos de la Administración Central a la planta de empleos establecida en el Decreto 061, todos expedidos por el alcalde de Palmira – Valle, en cuanto suprimieron el cargo del señor Álvaro Andrade León.

3.- ORDENASE al municipio de Palmira – Valle que reintegre al señor ÁLVARO ANDRADE LEÓN sin solución de continuidad para todos los efectos legales, al mismo cargo u otro similar que desempeñaba antes de la reforma administrativa, el de auxiliar de servicios generales en la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Económico del municipio de Palmira.

En caso de que el cargo haya sido provisto en propiedad, previo concurso de méritos, solo tendrá que pagar el municipio de Palmira, a favor del demandante los salarios, prestaciones legales y extralegales adeudadas desde su desvinculación hasta la ejecutoria de la sentencia.

Las sumas a favor del accionante se deberán indexar de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC), conforme al artículo 187 de la ley 1437 de 2011. (...)

4.- ORDENASE al municipio de Palmira – Valle, que las sumas que resulte deber descuenten la cifra que pago al actor por concepto de indemnización a raíz de la supresión del cargo que desempeñaba, si la hubiere, de igual forma no se podrá deducir suma alguna de dinero si durante su desvinculación el demandante celebró otras vinculaciones laborales con el Estado, tal como se expresó en la parte motiva de esta providencia.

5.- NIEGASE la condena en costas de la demanda. (...)"

2.2. Que el 1º de febrero de 2021, el apoderado judicial del señor Álvaro Andrade León formuló solicitud de ejecución de la sentencia No. 90 del 14 de abril de 2016.

2.3. Que mediante auto interlocutorio No. 362 del 06 de agosto de 2021, el Despacho procedió a librar mandamiento de pago a favor del señor Álvaro Andrade León y en contra del municipio de Palmira – Valle, por las sumas indicadas en la demanda ejecutiva por concepto de capital e intereses moratorios.

2.4. Que mediante memorial allegado a los canales digitales del Juzgado el 09 de septiembre de 2021, el municipio de Palmira – Valle, a través de apoderada judicial, se pronunció frente a la solicitud de ejecución y formuló como excepciones las denominadas “cobro de lo no debido, improcedencia de la indexación y genérica o innominada”. De la excepción de pago de la obligación denominada “cobro de lo no debido”, se corrió traslado mediante auto de sustanciación No. 575 del 21 de setiembre de 2021. La parte ejecutante se pronunció mediante memorial allegado el 27 de septiembre de 2021.

2.5. Que el 15 de febrero de 2022, se llevó a cabo la audiencia inicial de que trata el artículo 372 del Código General del Proceso, y al momento de agotarse la etapa de la conciliación, conforme lo establece el numeral 6º del artículo 372 ibidem, la apoderada judicial del municipio de Palmira – Valle, presentó una propuesta de conciliación, frente a la cual el apoderado judicial de la parte ejecutante hizo una contrapropuesta y por ende, la diligencia fue suspendida para que el Comité de Conciliación de la entidad ejecutada se pronunciara al respecto.

2.6. Que mediante mensaje de datos allegado a los canales digitales del Juzgado el 08 de abril de 2022, la apoderada judicial de la entidad ejecutada presentó una nueva formula conciliatoria, la cual fue plasmada en la certificación No. TRD-2022-130.27.18 del 06 de abril de 2022, expedida por la Secretaria Técnica del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Alcaldía Municipal de Palmira. Esta propuesta fue finalmente aceptada por la parte ejecutante, según memorial allegado al Juzgado el 20 de abril de 2022.

3. ACUERDO CONCILIATORIO

La apoderada judicial de la parte ejecutada, allegó al proceso la certificación No. TRD-2022-130.27.18 del 06 de abril de 2022, expedida por la Secretaria Técnica del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Alcaldía Municipal de Palmira, a través de la cual se dispuso la siguiente formula conciliatoria:

“...Analizada la recomendación del apoderado de la Entidad y una vez estudiados y deliberados los fundamentos fácticos, técnicos y jurídicos del presente caso, el Comité de Conciliación y Defensa Judicial, de manera unánime decide proponer fórmula de acuerdo conciliatorio, consistente en:

1.- El pago de los valores correspondientes a salarios, prestaciones legales y extralegales del señor ALVARO ANDRADE LEON, correspondiente a \$ 29.561.305, en el evento de haber continuado vinculado en el cargo de Auxiliar de Servicios Generales grado 02 de la Secretaría de Agricultura y de Desarrollo Económico, desde el periodo comprendido entre el 01 de abril de 2013 al 12 de marzo de 2015. El valor de la liquidación efectuada por la Subsecretaría de Talento Humano comprende los siguientes valores:

ÁLVARO ANDRADE LEÓN	
VIGENCIA	VALORES LIQUIDADOS
2013	\$ 10.785.018
2014	\$ 15.099.684
2015	\$ 3.676.603
TOTAL	\$ 29.561.305

2.- Proponer al demandante el reconocimiento y pago del 50% de los intereses moratorios que corresponden a la suma de \$ 22.579.512, teniendo como fechas extremas la ejecutoria de la sentencia (02/05/2016) y la fecha de recepción de la formula conciliatoria al correo:

adm01cali@cendoj.ramajudicial.gov.co, correspondiente al 23 de marzo del presente año; solicitando la condonación del 50% del valor restante.

3.- Solicitar la condonación de la totalidad de sumas correspondientes a las agencias en derecho y costas procesales del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

4.- Solicitar la condonación de la totalidad de sumas correspondientes a las agencias en derecho y costas procesales del proceso ejecutivo. 5.El pago de las sumas anteriormente indicadas se efectuará en la cuenta del despacho judicial, en un plazo máximo de treinta (30) hábiles contados a partir del auto o audiencia en la que apruebe el acuerdo conciliatorio.

La anterior propuesta conciliatoria, se establece teniendo en cuenta que el municipio de Palmira se encuentra frente a una obligación clara, expresa y exigible, contenida en un título ejecutivo como lo es la sentencia proferida al interior del proceso de Nulidad y Restablecimiento del

Derecho; sin embargo, en cuanto al periodo comprendido entre 13 de marzo de 2015 al 30 de diciembre de 2016, de los antecedentes administrativos del señor Álvaro Andrade León, se evidencia que se encontraba vinculado a la administración municipal mediante Decreto No. 276 del 02 de septiembre de 2015 y a través de Decreto No. 069 de marzo de 2016 se prorroga el nombramiento en provisionalidad que ostentaba en el cargo de técnico administrativo grado 01, motivo por el cual, no es viable jurídicamente que el municipio de Palmira reconozca sumas de dinero de periodos en los cuales el demandante estuvo vinculado en la administración, por cuanto estaría percibiendo doble emolumento de dineros que provienen del tesoro público, lo cual se encuentra proscrito conforme a lo dispuesto en la Sentencia SU 556-14.

En lo que respecta a la pretensión consistente en la obligación de hacer, no es posible por cuanto el nombramiento del demandante se encontraba condicionado a la aplicabilidad de la lista de elegibles que se llegase a conformar para nombrar al elegido que haya concursado para ese empleo, en virtud de la convocatoria No. 437 de 2017 llevada a cabo por la Comisión Nacional del Servicio Civil y en el entendido que, una vez el aspirante sea nombrado en este cargo, se perderían los efectos inmediatos del nombramiento efectuado por el Decreto No. 221 del 2019.”

El apoderado judicial de la parte ejecutada manifestó su aceptación a la propuesta presentada por la entidad ejecutada, al indicar mediante memorial radicado el 20 de abril de 2022, lo siguiente:

“En mi calidad de apoderado judicial de la parte demandante, dentro del asunto de la referencia, me permito pronunciarme conforme lo ordenó ese Despacho, a través de auto de sustanciación No. 262 del 19 de abril de 2022, sobre la certificación expedida por el Comité de Conciliación y Defensa Judicial, de la entidad demandada, lo cual se realiza de la siguiente manera:

1.- A mi poderdante, se le dio a conocer la nueva propuesta de conciliación presentada por el municipio de Palmira – Valle, a través del Comité de Conciliación y Defensa Judicial, sesión llevada a cabo el día 06 de abril de 2022, aceptando la propuesta conciliatoria.

2.- Por lo anterior solicito se profiera la providencia aprobatoria del acuerdo conciliatorio para los fines pertinentes, ya que a partir de la fecha en que se profiera, empieza a contar el término de 30 días, para que la entidad demandada cancele la obligación allí establecida.”

4. CONSIDERACIONES

En principio, debe indicarse que la conciliación en el derecho administrativo es un importante mecanismo para la composición de los litigios que pueden suscitarse a través de los medios de control consagrados en los artículos 138, 140, y 141 del CPACA y en ese orden coadyuva a la descongestión de los despachos judiciales con el fin de asegurar un eficaz acceso a la Administración de Justicia, tal y como lo ordenan el Preámbulo y los artículos 2 y 229 de la Constitución Política. Esta

consideración debe ser consecuente con la debida utilización que se pueda hacer de ésta, por ello mismo, exige previa homologación judicial.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 23 de 1991, modificado por la Ley 446 de 1998, artículo 70, las personas jurídicas de derecho público, a través de sus representantes legales o por conducto de apoderado, pueden conciliar, total o parcialmente, en las etapas prejudicial o judicial, sobre los conflictos de carácter particular y contenido económico de que conozca la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con ocasión de las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, reparación directa y contractual, previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Ahora bien, con fundamento en la Ley, la jurisprudencia¹ ha determinado los presupuestos para la aprobación de un acuerdo conciliatorio, los cuales son:

- 1.- La acción no debe estar caducada (art. 61 Ley 23 de 1.991, modificado por el art. 81 Ley 446 de 1.998).
- 2.- El acuerdo conciliatorio debe versar sobre acciones o derechos económicos disponibles por las partes (art. 59 Ley 23 de 1991 y 70 Ley 446 de 1.998).
- 3.- Las partes deben estar debidamente representadas y sus representantes tener capacidad para conciliar.
- 4.- El acuerdo conciliatorio debe contar con las pruebas necesarias, no ser violatorio de la ley y no resultar lesivo para el patrimonio público (art. 65 A Ley 23 de 1.991 y art. 73 Ley 446 de 1998).

Así las cosas, se tiene que la conciliación en materia de lo contencioso administrativo y su posterior aprobación, deben estar respaldadas con elementos probatorios idóneos y suficientes respecto del derecho objeto de controversia, de manera que no quede duda al juez de conocimiento que existen altas probabilidades de condena en contra de la administración, y que la aprobación del acuerdo conciliatorio resultaría provechosa para los intereses de las partes en conflicto.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Despacho procederá a analizar el cumplimiento de los presupuestos para determinar si resulta procedente o no, la aprobación de la conciliación judicial celebrada entre los representantes judiciales del señor Álvaro Andrade León y el municipio de Palmira – Valle.

PRESUPUESTOS PARA LA APROBACIÓN DEL ACUERDO CONCILIATORIO

1.- Que no haya operado el fenómeno de la caducidad.

Conforme al artículo 164, numeral 2, literal k, de la Ley 1437 de 2011, la caducidad de los procesos ejecutivos respecto de títulos derivados de providencias judiciales

¹ Ver entre otros, Consejo de Estado, providencia del 06 de diciembre de 2010, C.P. Olga Valle de la Hoz, Actor Álvaro Herney Ordoñez Hoyos y otros, Rad. 19001-23-31-000-2001-00543-01 (33462),

proferidas por esta jurisdicción está determinada en cinco (5) años, contados a partir del momento en que la obligación se hace exigible.

En el presente asunto, la sentencia No. 90 del 14 de abril de 2016, dictada por este Estrado Judicial, dentro del proceso ordinario de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, radicado bajo el No. 2013-00409-00, quedó ejecutoriada el 29 de abril de 2016² y su exigibilidad fue a partir del 01 de marzo de 2017 – una vez transcurridos los diez (10) meses de que trata el artículo 192 del C.P.A.C.A.-, por lo que el término máximo para promover el presente medio de control fenecía el 01 de marzo de 2022, siendo presentada la solicitud de ejecución el 15 de junio de 2021, por lo que se colige en consecuencia que la misma fue presentada oportunamente, dentro del término de caducidad previsto en el artículo 164, numeral 2, literal k, de la Ley 1437 de 2011.

2.- Disponibilidad de los Derechos Económicos:

En este sentido, se advierte que el tema debatido hace referencia al cumplimiento de dos tipos de obligaciones contenidas en una sentencia judicial, una obligación de hacer: consistente en reintegrar al señor Álvaro Andrade León, sin solución de continuidad para todos sus efectos legales, al cargo que desempeñaba de auxiliar de servicios generales en la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Económico del municipio de Palmira, reintegro que quedó sujeto a que el cargo no haya sido provisto en propiedad previo concurso de méritos y, una obligación de pagar una suma líquida de dinero, en caso de que se imposibilite su reintegro, para lo cual se ordenó el pago de los salarios, prestaciones legales y extralegales adeudadas desde su desvinculación hasta la ejecutoria de la sentencia.

Examinado el material probatorio obrante en el proceso, se tiene que la obligación de hacer ordenada en la sentencia No. 90 del 14 de abril de 2016, no puede ejecutarse, si se tiene en cuenta que mediante certificación No. TRD-2022-171.22.1.100 del 04 de marzo de 2022, expedida por la Subsecretaria de Gestión de Talento Humano de la Secretaria de Desarrollo Institucional del municipio de Palmira – Valle, se informó que el cargo al cual debía ser reintegrado el ejecutante estaba provisto por personal que ingresó a la carrera administrativa mediante concurso de méritos.

En efecto, se indicó lo siguiente:

“...Que de acuerdo a la Nota Interna TRD-2022-130.8.1.114 del 1º de marzo de 2022, informamos que los servidores públicos que ocupan el cargo Técnico Administrativo, Código 367, Grado 01, de acuerdo a la lista de elegibles de la Convocatoria 437, se relacionan a continuación:

<i>Apellidos y Nombres</i>	<i>Fecha de ingreso</i>	<i>Tipo de vinculación</i>
<i>Cabrera Arellano Camila Yisset</i>	<i>12/03/2020</i>	<i>Carrera Administrativa</i>
<i>Polo Fiuroa Mayyerline</i>	<i>11/03/2020</i>	<i>Carrera Administrativa</i>
<i>Solís Chara Anni Julieth</i>	<i>10/03/2020</i>	<i>Carrera Administrativa</i>

² Folio 233 del expediente digital – cuaderno 1.

De manera que, atendiendo la orden emitida en la sentencia No. 90 del 14 de abril de 2016, y ante la imposibilidad de reintegro laboral, procede únicamente el pago de los salarios, prestaciones legales y extralegales adeudadas desde la desvinculación del señor Álvaro Andrade León hasta la ejecutoria de dicha providencia, esto es, en el periodo comprendido entre el 1º de abril de 2013³ al 12 de marzo de 2015. La sentencia título base de ejecución quedó ejecutoriada el 29 de abril de 2016, sin embargo, el periodo establecido para pagar los emolumentos referidos, se contabiliza hasta el 12 de marzo de 2015, en razón a que el ejecutante se vinculó nuevamente en provisionalidad a la Administración a partir del 13 de marzo de 2015 hasta el 30 de diciembre de 2016.

En el proceso ordinario de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, obran como pruebas los actos administrativos a través de los cuales el señor Álvaro Andrade León, fue nombrado en provisionalidad en el cargo de Técnico Administrativo, Código 367, Grado 01 de la planta globalizada del municipio de Palmira – Valle.

Bajo esa circunstancia, debe indicarse que el pago de los salarios, prestaciones legales y extralegales adeudadas a favor del señor Álvaro Andrade León, corresponde a un derecho cierto, indiscutible e irrenunciable, el cual no es disponible por las partes; sin embargo, en el caso concreto, es importante advertir que la entidad ejecutada, municipio de Palmira – Valle, dispuso efectuar el pago del 100% del capital, lo cual corresponde al valor total de veintinueve millones quinientos sesenta y un mil trescientos cinco pesos m/cte. (\$ 29.561.305), tal como se expone a continuación:

ÁLVARO ANDRADE LEÓN	
VGECNCIA	VALORES LIQUIDADOS
2013	\$ 10.785.018
2014	\$ 15.099.684
2015	\$ 3.676.603
TOTAL	\$ 29.561.305

Aquí, debe indicarse que la suma antes descrita como capital, esta acorde con los valores indicados por el apoderado judicial de la parte ejecutante en su solicitud de ejecución.

De manera que, la conciliación se plantea con relación al pago del 50% de intereses moratorios, que corresponde a la suma veintidós millones quinientos setenta y nueve mil quinientos doce pesos m/cte. (\$ 22.579.512) y la condonación total de la condena costas del proceso, aspecto que puede ser objeto de conciliación, porque no se trata de derechos laborales irrenunciables, tal como lo precisó el Consejo de Estado mediante providencia fechada el **10 de septiembre de 2009**⁴, al considerar lo siguiente:

³ Mediante el Decreto 062 del 31 de marzo de 2013, se procedió a la incorporación de los servidores públicos de la Administración central del municipio de Palmira a la planta de empleos establecida en el Decreto 061 del 31 de marzo de 2013, por lo que, a partir del día siguiente, se produjo la desvinculación del ejecutante.

⁴ Consejo de Estado, providencia del 10 de septiembre de 2009, exp. No. 2002-1211, M.P. Dra. Bertha Lucia Ramírez.

“...El demandante, en su condición de acreedor, había renunciado a reclamar los intereses, e indexaciones a los cuales tenía derecho, porque a diferencia de lo que ocurre con los derechos laborales determinados en la ley, que son irrenunciables, aquellos que son inciertos y discutibles pueden ser conciliables y en esa medida el actor podía renunciar, como evidentemente lo hizo, al pago de intereses y sanción por mora en el pago de sus acreencias laborales.”

Así las cosas, para el Despacho es claro que el asunto objeto de estudio es susceptible de conciliación.

3.- Representación de las partes y capacidad para conciliar:

Las partes se encuentran representadas legalmente a través de apoderados judiciales, de conformidad con los poderes que les han sido otorgados y que obran en el expediente digital del proceso, por parte del señor Álvaro Andrade León, se encuentra representado por el doctor Oscar Iván Montoya Escarria, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.385.900 y T.P. No. 98.164 del C. S de la J, a quien se le otorgó con plena facultad de conciliar.

Por parte del municipio de Palmira - Valle, se encuentra que está representada judicialmente por la doctora Paola Andrea Guzmán Carvajal, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.113.673.467 y T.P. No. 295.535 del C. S de la J, a quien se le otorgó la facultad de conciliar, según el memorial poder glosado a folio 30 del documento 17 del expediente electrónico del proceso.

4.- Que el acuerdo conciliatorio cuente con las pruebas necesarias, no sea violatorio de la ley y no resulte lesivo para el patrimonio público:

En principio, debe indicarse que conformidad con lo previsto en el numeral 6° del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce de los procesos ejecutivos derivados de las condenas por ésta impuestas, así como también de las conciliaciones aprobadas por la misma, al igual que de las provenientes de laudos arbitrales en que hubiere sido parte una entidad pública y de los procesos originados en los contratos celebrados por dichas entidades.

El numeral 1° del artículo 297 ibidem indica que constituyen título ejecutivo, las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por esta Jurisdicción, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias.

Así mismo, el artículo 422 Código General del Proceso, establece los requisitos que debe cumplir el documento a través del cual se pretende que se libere mandamiento ejecutivo, a saber:

- . Que se trate de documento o documentos auténticos, que conformen una unidad jurídica.
- . Que emanen de actos o contratos del deudor o causante (títulos contractuales), o de una sentencia de condena proferida por el juez (títulos judiciales), etc.

-. Que en dicho documento aparezca, a favor del ejecutante y a cargo del ejecutado, una obligación ***clara, expresa y exigible***.

A partir de lo anterior, se tiene que en los procesos ejecutivos el Juez debe examinar si, el título presentado como base del recaudo contiene una obligación ***inequívoca***, esto es, fácilmente inteligible y entendible, así como ***expresa*** en cuanto al crédito del ejecutante y la deuda del ejecutado y, finalmente ***exigible***, es decir, que la misma pueda demandarse por no estar sometida a plazo o condición, o de lo contrario, que el término para su cumplimiento ya se encuentre vencido.

Por tanto, tratándose de títulos ejecutivos, el Honorable Consejo de Estado ha expresado que éstos pueden ser simples, cuando la obligación se consagra en un solo documento, o complejo, cuando el mismo lo constituyen varios documentos, como sucede por regla general con el cobro ejecutivo de obligaciones derivadas de contratos administrativos o sentencias judiciales, en las cuales, el título generalmente lo conforma la providencia o el contrato respectivo, así como otros legajos⁵.

De esta manera, es importante indicar que cuando la obligación se encuentra contenida en una decisión judicial, generalmente el título ejecutivo es complejo, ya que estará conformado por la copia auténtica de la sentencia, con las respectivas constancias de notificación y ejecutoria, y por el acto administrativo con el que la Administración pretende dar cumplimiento a lo ordenado en ésta⁶; evento en el cual, la demanda ejecutiva se inicia porque la sentencia se acató de manera imperfecta, no obstante, el Honorable Consejo de Estado ha indicado que, excepcionalmente el título ejecutivo será simple, cuando el mismo lo constituye únicamente la sentencia, al no haberse dado cumplimiento a la misma⁷.

Ahora bien, en el presente asunto, con el fin de acreditar la existencia de un título ejecutivo complejo, se allegaron como pruebas las siguientes:

- Expediente digitalizado del proceso ordinario de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, radicado bajo el No. 2013-00409-00, adelantado por el señor Álvaro Andrade León, en contra del municipio de Palmira – Valle, en el cual obran los actos administrativos de vinculación en provisionalidad a la Administración, su respectiva hoja de vida y los emolumentos devengados por prestaciones sociales.
- Copia de la sentencia No. 90 del 14 de abril de 2016, dictada por este Estrado Judicial, dentro del proceso ordinario de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, radicado bajo el No. 2013-00409-00, adelantado por el señor Álvaro Andrade León, en contra del municipio de Palmira – Valle, con su respectiva constancia de ejecutoria. (Documento 04 del expediente electrónico del proceso)

⁵ Consejo de Estado, Sección Tercera, Providencia del 1 de octubre de 2008, Expediente No. 26.706, Consejero Ponente: Dr. Mauricio Fajardo Gómez.

⁶ Consejo de Estado, Sección Cuarta, Providencia del 26 de febrero de 2014, Expediente No. 19250, Consejera Ponente: Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

⁷ Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 02 de abril de 2014, Expediente No. 1002-14, Consejero Ponente Dr. Gerardo Arenas Monsalve.

- Copia de la solicitud de cumplimiento de la sentencia No. 90 del 14 de abril de 2016, presentada por la parte ejecutante ante el municipio de Palmira – Valle, el 10 de julio de 2019. (Documento 04 del expediente electrónico del proceso)
- Copia del Decreto 221 del 17 de diciembre de 2019, por medio del cual la entidad ejecutada dio cumplimiento a la sentencia No. 90 del 14 de abril de 2016 y, nombró al señor Álvaro Andrade León, en el cargo de Técnico Administrativo, Código 367, Grado 01 de la planta globalizada del municipio de Palmira – Valle. Sin embargo, la ejecución de este acto administrativo se condicionó a la aplicabilidad de la lista de elegibles conforme se ordenó en el fallo judicial. Este acto administrativo, le fue notificado al ejecutante el 23 de diciembre de 2019.
- Copia del recurso de reposición formulado por el apoderado judicial de la parte ejecutante en contra del Decreto 221 del 17 de diciembre de 2019, al considerar que el nombramiento no debía estar condicionado a la aplicación de la lista de elegibles. Según lo aportado con la demanda, este recurso no fue resuelto por el municipio de Palmira – Valle. (Documento 04 del expediente electrónico del proceso)
- Certificación fechada el 04 de marzo de 2022, expedida por Subsecretaria de Gestión de Talento Humano de la Secretaría de Desarrollo Institucional del municipio de Palmira – Valle, a través de la cual se indicó el nombre de las personas que estaban ocupando en propiedad el cargo al cual debía ser reintegrado el ejecutante, en aras de acreditar la imposibilidad de reintegro solicitada. (Documento 26 del expediente electrónico del proceso)

A partir de lo anterior, se logra establecer que en el presente asunto se está frente a un **título complejo**, el cual está integrado por la sentencia de primera instancia fechada el 14 de abril de 2016, proferida por este Estrado Judicial y, el Decreto 221 del 17 de diciembre de 2019, expedido por el municipio de Palmira – Valle. Además, en los términos del inciso 2º del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011⁸, la sentencia judicial que se pretende ejecutar, es actualmente exigible, en razón a que quedó debidamente ejecutoriada desde el 29 de abril de 2016⁹.

De esta forma, el Despacho encuentra debidamente respaldada la obligación a cargo de la entidad ejecutada, municipio de Palmira – Valle y a favor del señor Álvaro Andrade León.

⁸ **"Artículo 192. Cumplimiento de sentencias o conciliaciones por parte de las entidades públicas.** Cuando la sentencia imponga una condena que no implique el pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, la autoridad a quien corresponda su ejecución dentro del término de treinta (30) días contados desde su comunicación, adoptará las medidas necesarias para su cumplimiento.

Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia. Para tal efecto, el beneficiario deberá presentar la solicitud de pago correspondiente a la entidad obligada."

⁹ Folio 233 del expediente digital – cuaderno 1.

Ahora bien, revisada la propuesta de conciliación plasmada en la certificación No. TRD-2022.130.27.18 del 06 de abril de 2022, expedida por la Secretaría Técnica del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del municipio de Palmira – Valle, en donde se propone pagar el 100% del capital, esto es, el pago de los salarios, prestaciones legales y extralegales adeudadas desde la desvinculación del señor Álvaro Andrade León hasta la ejecutoria de dicha providencia, lo cual corresponde al periodo comprendido entre el 1º de abril de 2013¹⁰ al 12 de marzo de 2015 y el 50% de los intereses moratorios causados, el Despacho considera que dicha conciliación no resulta violatoria de la Ley ni lesiva para el patrimonio público y se encuentra debidamente respaldada en el material probatorio arrimado al plenario, el cual da cuenta de una obligación clara, expresa y exigible a cargo del municipio de Palmira – Valle.

En este orden de ideas, no encuentra el Despacho reparo en impartir aprobación a la conciliación a la que han llegado las partes, atendiendo a que el apoderado judicial de la parte ejecutante según el poder obrante en el proceso tiene expresa facultad de conciliar y en aras de la representación judicial que debe ejercer de su mandatario acepta la propuesta formulada por la entidad convocada, en los términos indicados en la certificación No. TRD-2022.130.27.18 del 06 de abril de 2022, expedida por la Secretaría Técnica del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del municipio de Palmira – Valle, en donde se plasmaron los valores a reconocer a favor del señor Álvaro Andrade León.

En virtud de lo anterior, se procederá a aprobar el acuerdo conciliatorio celebrado entre el señor Álvaro Andrade León y el municipio de Palmira – Valle, el cual se debe ceñir a la propuesta de conciliación plasmada en la certificación No. TRD-2022.130.27.18 del 06 de abril de 2022.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial del Cali,

R E S U E L V E

PRIMERO: APROBAR LA CONCILIACIÓN JUDICIAL celebrada ante este Despacho Judicial, entre los apoderados judiciales del señor **ÁLVARO ANDRADE LEÓN** y el **MUNICIPIO DE PALMIRA – VALLE**, plasmada en la certificación No. TRD-2022.130.27.18 del 06 de abril de 2022, expedida por la Secretaría Técnica del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del municipio de Palmira – Valle, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: El MUNICIPIO DE PALMIRA – VALLE dará cumplimiento al presente acuerdo en los términos dispuestos en la certificación No. TRD-2022.130.27.18 del 06 de abril de 2022, expedida por la Secretaría Técnica del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del municipio de Palmira – Valle.

TERCERO: Esta providencia y el acuerdo judicial al que llegaron las partes hacen tránsito a cosa juzgada y prestan mérito ejecutivo.

¹⁰ Mediante el Decreto 062 del 31 de marzo de 2013, se procedió a la incorporación de los servidores públicos de la Administración central del municipio de Palmira a la planta de empleos establecida en el Decreto 061 del 31 de marzo de 2013, por lo que, a partir del día siguiente, se produjo la desvinculación del ejecutante.

CUARTO: En firme esta providencia, háganse los registros respectivos en el sistema de gestión judicial SIGLO XXI.

QUINTO: Este juzgado comunica los canales digitales del despacho y su Oficina de Apoyo, de la siguiente manera:

- ✓ **Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cali:**
Correo electrónico: adm01cali@cendoj.ramajudicial.gov.co
Teléfono: (2) 8962433
- ✓ **Ministerio Público – Procuraduría Judicial 57**
Correo electrónico: procjudadm57@procuraduria.gov.co
mecaicedo@procuraduria.gov.co
- ✓ **Radicación de procesos ordinarios:**
repartoadtivoscali@cendoj.ramajudicial.gov.co
- ✓ **Radicación memoriales:**
of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co
- ✓ **Radicación de tutelas y habeas corpus:** URL
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/TutelaEnLinea>

Las líneas telefónicas de la Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos de Cali son:

Teléfonos: (2) 896-24-12
(2) 896-24-11

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

PAOLA ANDREA GARTNER HENAO
Juez

LCMS.

Firmado Por:

Paola Andrea Gartner Henao
Juez
Juzgado Administrativo
Oral 001
Cali - Valle Del Cauca

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **195093ef9b82278de3d94e851d201083a6a9c3d41daf5fdb39abcda8d223ecc2**

Documento generado en 27/04/2022 01:29:23 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>